

Relato de Gabriel Sanhueza Suárez, periodista chileno sobre la masacre del Río Sumpul, ocurrida el 14 de mayo de 1980.

Ese mes me encontraba en la ciudad de San José, Costa Rica. No recuerdo si fue a fines de mayo o en los primeros días de junio, cuando un personero de Amnistía Internacional, cuyo nombre he olvidado, me contó que tenían rumores de que en la zona fronteriza de El Salvador y Honduras habría ocurrido una masacre de cientos de campesinos de El Salvador. Se decía que la mayoría de las víctimas habían sido, principalmente, mujeres, ancianos y niños.

En esa conversación, participó también la periodista alemana Úrsula Ferdinand. Este personero nos preguntó si nos atrevíamos a ir a la frontera, para ver si esa información era verdadera. Amnistía Internacional necesita con urgencia detalles para poder hacer una denuncia internacional.

Tanto Úrsula como yo aceptamos ir, aunque se nos advirtió que el ejército hondureño había impuesto un control férreo en la zona, para impedir que se divulgaran detalles de la realización de la masacre contra los campesinos salvadoreños. El gobierno de la época la negaba rotundamente.

Un par de días después, partimos en un coche arrendado a Honduras, junto a un joven austriaco, cuyo nombre ya no recuerdo, quién decidió acompañarnos.

Yo había estado anteriormente en Honduras, pero sólo en Tegucigalpa. Nuestra idea, era simular ser turistas, interesados en los restos precolombinos, como una forma de eludir las preguntas incómodas de los militares.

Recuerdo que en el camino compré muchos mapas sencillos y de manera ostensible marcaba, sobre ellos, los lugares turísticos. El lugar turístico más cercano que encontré de la masacre, fueron las llamadas Ruinas de Copán.

Durante el viaje fuimos varias veces controlados por personal militar hondureño.

En Santa Rosa de Copán tratamos de ubicar al sacerdote católico hondureño Fausto Millas, de la Parroquia de Corquin, cuyo nombre nos habían entregado en San José y quién tenía mayores antecedentes de la masacre.

Desgraciadamente no lo encontramos, ya que estaba recorriendo la zona. Dada la inseguridad del lugar, decidimos no esperarlo, pues presentíamos, que en cualquier momento podíamos ser detenidos y alejados del lugar. Encontramos, en una dependencia de la parroquia a una mujer campesina salvadoreña, que estaba herida de bala en una pierna y que había sido una de las pocas sobrevivientes de la masacre, con uno de sus niños. Con su ayuda y la de otros amigos del sacerdote, logramos finalmente conseguir que un niño campesino nos guiara hacia la frontera, a campo traviesa.

Así abandonamos rápidamente, a pie Santa Rosa. Llegamos hasta un lugar llamado Telquinte, lo más cercano desde Honduras al lugar de la masacre.

Recuerdo que la caminata fue infernal. Subiendo y bajando cerros empinados por huellas increíblemente angostas, llenas de guijarros y donde las caídas estaban a la orden del día. Ursula terminó con los pies destrozados e infectados. Parte de la marcha la hicimos de noche para no tropezar con los soldados. Creo que el recorrido se prolongó interrumpidamente por cerca de 14 horas, ya que tuvimos que dar unos rodeos larguísimos.

Al otro día, después de dormir un par de horas, en una choza de campesinos, comencé a hacer entrevistas grabadas a los sobrevivientes. Rápidamente nos quedó claro que la masacre había existido.

Esta se había iniciado en El Salvador, en una aldea llamada Las Aradas y en sus alrededores, el día 14 de mayo muy temprano. La matanza duró todo el día y participaron en ella, por lo menos dos helicópteros de la Guardia Nacional de ese país, soldados y paramilitares de ORDEN, organización de ultra derecha. La gente, indefensa fue encerrada y obligada a correr hacia al río, hacia la frontera hondureña.

Ese día recogimos relatos dantescos y que eran casi imposible de creer: mujeres torturadas antes de recibir un tiro de gracia. Niñitos lanzados al aire para hacer blanco. Los pocos campesinos que lograron cruzar el río Sumpul fueron devueltos amarrados por los soldados hondureños a El Salvador, donde fueron asesinados de inmediato.

Es difícil estimar la cantidad de muertos, pero todos coincidían en varios cientos. ¿Seiscientos?.

El segundo día, recorrimos el lado hondureño del Sumpul, acompañados de un par de campesinos. Hicimos fotos de restos humanos y nuevas grabaciones. La verdad es que fuimos temerarios, ya que podíamos advertir soldados y paramilitares en el lado salvadoreño. Atravesamos el río un par de veces.

El tercer día, de madrugada, salimos de la zona, después de una caminata tan horrible, como la anterior. Acordamos separarnos y también repartirnos el material fotográfico y los casetes grabados, para tratar de salvar el máximo de testimonios, en caso de detención de alguno de nosotros.

En Tegucigalpa me encontré con Ursula Ferdinand. En un hotelucho procesamos el material grabado, borrando en las transcripciones los nombres de los testigos entrevistados para protegerlos de seguras represalias. Logré contactar a un profesor universitario Virgilio Carias y a un dirigente político Cesar Murillo, a quienes les dejé copia de lo obtenido bajo el compromiso de que hicieran una documentación pública de la Masacre del Sumpul. Ellos así lo hicieron.

En San José, Costa Rica, hicimos entrega del material a Amnistía Internacional y a Sebastián Vaquerano, Presidente del Programa Centro Americano de Defensa de la Autonomía y Solidaridad con las Universidades, quienes editaron un documento de denuncia en el mes de julio de 1980.

En Europa, di varias entrevistas a medios de comunicación. Editamos también una documentación en alemán, con la ayuda de la Universidad de Essen.

En este testimonio, tan sucinto, quiero darles las gracias infinitas a todos los campesinos sobrevivientes que nos ayudaron en la recopilación de los datos. Expresarles mi admiración y cariño por su valentía.

Quiero también pedirles disculpas, por no haber hecho más en la denuncia de ese gran horror, que aún continua, sin ningún tipo de reparación.

Gabriel Sanhueza Suárez

Santiago de Chile, mayo de 2010

Las Aradas y río Sumpul: Santuario y centro espiritual que deben ser protegidos

El pasado viernes 14 de mayo, desde tempranas horas de la mañana, más de 500 personas provenientes de caseríos y cantones como Los Ramírez, Sicahuite, El Jícaro, Las Minas, Los Pozos, La Laguna Seca, Zapotal, El Coyolar, Guarjila y desde los municipios de Las Vueltas, Ojos de Agua, Arcatao, Nueva Trinidad Las Flores y San Antonio los Ranchos comenzaron la larga caminata por veredas y campo travieso para llegar a uno de los lugares más remotos de El Salvador, a orillas del río Sumpul en la frontera con Honduras, donde antes de la guerra existía el caserío de Las Aradas.

El caserío ya no existe. Las Aradas es hoy sinónimo de la primera gran masacre de cientos de campesinos y campesinas indefensas, que luego se repitió en 1981 en El Mozote, en 1982 en Los Amates y Santa Anita (masacre de la "Guinda de mayo"), en 1983 en Las Bermudas, en 1984 en el río Gualsinga y en muchos lugares más. Con la masacre de Las Aradas, las fuerzas represivas del gobierno salvadoreño (Fuerza Armada, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y ORDEN) dieron inicio a los operativos de "tierra arrasada", es decir, de exterminio a la población civil organizada, considerada base social de la guerrilla.

Comparada con otras masacres y hechos violentos de la guerra, la masacre del Sumpul hasta la fecha ha sido poco visibilizada, y sigue siendo negada por los que en ese entonces eran las autoridades y responsables, y sus partidarios de la derecha. Una de las razones que les facilita negarlo es que no hay otras evidencias que los escalofrantes y conmovedores relatos de las personas sobrevivientes. No hay evidencias "científicas", por ejemplo exhumaciones de restos humanos como se hicieron en El Mozote, ya que el cerco militar impidió sepultar a los muertos. Sus cuerpos fueron devorados por animales y zopes y sus osamentas quedaron dispersas en el vasto terreno del "Plan de Las Aradas". Muchos también desaparecieron en el río cuando fueron alcanzados por las balas en el momento de cruzarlo. Las únicas evidencias gráficas de restos humanos en el lugar, y por eso invaluable, son las fotos que tomó Gabriel Sanhueza, periodista chileno, quien junto con otras dos personas logró acercarse al lugar desde Honduras en junio de 1980, unas tres semanas después de la masacre. Estas fotos fueron entregadas a la Comisión de la Verdad en 1992, cuyos archivos están "enterrados" en Naciones Unidas, bajo su custodia, sin posibilidad cercana que el pueblo salvadoreño recupere esa información de indudable valor histórico al que tiene derecho.

La falta de reconocimiento, justicia y reparación es uno de los motivos porque la población sobreviviente y familiares de las víctimas - con gran disciplina y decisión - organizan cada año su encuentro con el pasado en el lugar de los hechos, un lugar desolado y de muy difícil acceso. Les implica grandes esfuerzos, caminatas de entre 2 a 4 horas por cuevas empinadas y montudas, o cruzando el río. Estas conmemoraciones, a las que acuden cada año no menos de 500 personas, son una especie de "evidencia viviente", un esfuerzo físico extraordinario para afirmar con la pura presencia y el testimonio de los

sobrevivientes que el Plan de las Aradas es tierra sagrada, un panteón, un santuario de víctimas inocentes.

Como tratan de impedir hacer memoria

Desde hace algunos años, las comunidades han estado recogiendo pequeñas donaciones, para algún día poder comprar los terrenos, donde en 1994 ya se construyó un pequeño monumento. Hay propietarios anuentes a vender, pero también otros, que son renuentes, como Neftalí Rivas, un militar retirado quien además de mantener gente armada y con radiocomunicación en sus terrenos fronterizos (quién sabe por qué motivos turbios), trata de obstaculizar el acceso de la gente al lugar y a las conmemoraciones que se realizan en esta fecha.

Otra persona que no hace más que desconocer y contrariar los esfuerzos de la gente de obtener justicia, verdad y reparación es el mismo Obispo católico de la diócesis de Chalatenango, Monseñor Luis Morao. En dos ocasiones, 2009 y 2010, participó en la misa del aniversario en Las Aradas, pero no para dignificar la memoria de las víctimas y apoyar el reclamo de la población. En lugar de solidarizarse sin reparo con las víctimas, hace comentarios absurdos y preconciliares sobre la iglesia católica, y en contra de otras creencias y religiones, que además no vienen al caso, y, lo más grave, comentarios que ponen en un mismo plan a víctimas y victimarios. Su renuncia deliberada a conocer y reconocer la verdad de lo ocurrido deja todo en manos de una "justicia de Dios", desconociendo que también hay instrumentos legales en nuestras manos que deberían aplicarse para hacer justicia, antes de cualquier "juicio final". Con eso le hace el juego a aquellos que siguen negando que esa masacre haya ocurrido - especialmente exmilitares de alto rango. Monseñor Morao antes de ser obispo de Chalatenango era obispo militar.

Su presencia en el lugar este 14 de mayo causó indignación en muchos sobrevivientes que así me lo expresaron. También ofendió, llamándoles "catrachos", a los hondureños presentes, entre ellos personas extraordinarias que en 1980 solidariamente ayudaron a los sobrevivientes o enterraron a algunos de los muertos en el patio de sus casas, bajo riesgo de su propia vida. Fue triste ver que curas diocesanos presentes no intervinieron y ninguno de ellos tomó el micrófono para suavizar todo lo dicho por el obispo.

Su discurso y actitud completamente irrespetuosa, que en nada contribuyó al recuerdo y a la oración por lo que había venido la gente, desde su "altura" e investidura de obispo, desde una supuesta "superioridad" que a menudo la hace sentir a feligreses y subordinados, no sugiere otra cosa que ver cómo obviar su presencia el próximo año, para poder conmemorar y celebrar la palabra de Dios con todo el respeto y la devoción que las víctimas merecen; en ese sentido insinuó uno de los presentes después de la misa: *"Ya antes hacíamos las conmemoraciones, sin que hubo misa..."*

Tenemos que unir más esfuerzos e involucrar otras instancias

Las dificultades descritas ponen en la mesa también la necesidad de hacer un esfuerzo colectivo todavía mayor para visibilizar lo sucedido en Las Aradas. Parece ser un momento oportuno para llevar la reivindicación de las víctimas a otras instancias (además de lo judicial, que es uno de los caminos que hay que continuar). Estas tierras, en vez de ser compradas por los mismos sobrevivientes cuyos familiares fueron asesinados en el lugar, deberían ser declaradas SANTUARIO NACIONAL y AREAS PROTEGIDAS, similar a Cihuatán, Tazumal o San Andrés, que por ser sitios históricos y además centros ceremoniales de los pueblos indígenas de El Salvador, están protegidos por una ley especial. No se puede negar que Las Aradas se ha convertido, 30 años después de la masacre, en un verdadero centro ceremonial y espiritual del pueblo chalateco y un elemento importante de su identidad. Por eso le pertenece y debe ser protegido por ley. La población puede contribuir a la indemnización de los actuales propietarios, pero es el Estado el que debe reconocer estos terrenos y el río como patrimonio cultural, garantizar para siempre su accesibilidad y uso espiritual por la población y poner en manos de las comunidades y sobrevivientes su custodia.

De esto también se habló este 14 de mayo en Las Aradas, en presencia de algunos alcaldes y representantes de organizaciones locales. Hay esperanza que a corto plazo con ese fin, ojalá auspiciado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, una comisión representativa de las comunidades, acompañada por organismos solidarios y de derechos humanos como Tutela Legal, comience un acercamiento con autoridades correspondientes: la Secretaría de la Cultura, Ministerio de Medio Ambiente, Obras Públicas, Ministerio de Educación. Acceder a las peticiones y apoyar el planteamiento de las comunidades sería un modelo muy digno de reparación y justicia restaurativa para las víctimas, las futuras generaciones y todo el pueblo salvadoreño.

Dorothee Molders
15 de Mayo 2010